

DISCURSO de TOMA DE POSESIÓN TSJC

Vull que aquestes primeres paraules, després de prometre el càrrec com a president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, estiguin dirigides a reafirmar públicament el meu decidit compromís en defensa de la legalitat i d'observació dels deures judicials, complint i fent complir la Constitució i el conjunt de l'ordenament jurídic que se'n deriva, com a expressió de la voluntat popular democràticament canalitzada a través dels Parlaments respectius, des del convenciment que només amb la seva efectivitat es podrà garantir una convivència ordenada i pacífica, i generar la confiança necessària dels ciutadans en el seu sistema de justícia.

Com es recordava a la darrera reunió de presidents de Tribunals Superiors de Justícia, en una societat democràtica, el Poder Judicial és essencial per garantir l'Estat de Dret i preservar els drets dels ciutadans. A la confiança d'aquests últims tan sols hi arribarem si l'exercici de la potestat jurisdiccional és realitzat en un marc de plena independència, on els jutges i magistrats actuïn amb imparcialitat i eficàcia, amb respecte a la legalitat i també al ciutadà, destinatari a la fi de la tutela judicial que en cada moment demani.

Mencions d'agraiments

Vull agrair als que m'han precedit en la presidència del TSJC el generós esforç realitzat en la millora de la institució judicial, singularment al Miguel Ángel Gimeno, però també a la Maria Eugenia Alegret. Amb tots dos he tingut l'honor de compartir responsabilitats de govern i de tots dos he rebut també un exemple d'entrega i dedicació a l'alçada de la institució que tant dignament han presidit. Procuraré mantenir aquest mateix nivell d'exigència.

He de agradecer también al Consejo General del Poder Judicial, y lo hago a través de su Presidente, la confianza que ha depositado en mi persona como representante del Poder Judicial en Cataluña. La altísima responsabilidad que me transfieren será un reto en mi quehacer futuro y, al tiempo, un estímulo de superación en la obtención de los objetivos marcados.

Y quiero tener aquí un recuerdo de gratitud para con los compañeros y compañeras de las Secciones séptima y octava de la Audiencia de Barcelona, con quienes en los últimos 27 años he compartido labor jurisdiccional, así como hacia los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios colaboradores en ambas oficinas; y con los compañeros y compañeras con quienes he compartido tareas de gobierno. Todos habéis hecho posible que yo esté hoy aquí.

Y, como no, mi gratitud, admiración y cariño para Pilar, mi esposa, y mis dos hijos, siempre conmigo.

Asumo hoy esta responsabilidad desde el convencimiento de que el Poder Judicial al que representamos tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad cada vez más libre, más segura, más igualitaria, más respetuosa y moderna. Y de que los artífices de esos logros en nuestra Comunidad han de ser los Jueces y Magistrados de Cataluña, a cuya disposición quiero ponerme desde hoy. Compartimos responsabilidades y objetivos, que no son otros que lograr que los ciudadanos y ciudadanas se puedan sentir confiados y orgullosos de un sistema de justicia que les protege, les pertenece y les sirve.

Estamos viviendo tiempos políticamente complejos

Cataluña se encuentra inmersa en un intenso debate social relacionado con la propuesta de revisión del actual modelo de encaje y convivencia con el resto de España. El Parlament de Cataluña, en cuanto que depositario de la voluntad democráticamente expresada por el pueblo catalán, está plenamente legitimado para emprender iniciativas de mejora de ese marco de relaciones y convivencia; sin embargo, el propio Parlament soporta su legitimidad en el Estatut de Cataluña y, antes, en la Constitución Española de 1978, de tal forma que ninguna de estas normas básicas podrá verse superada sino es previa su reforma, lograda por los procedimientos establecidos en ellas. Este es el Estado de Derecho que todos nos hemos dado y el pilar más sólido de nuestra convivencia pacífica.

En una sociedad democráticamente organizada, el Poder Judicial, integrado por Jueces y Magistrados independientes e imparciales, ha de ser la garantía última en la preservación de ese Estado de Derecho. Los Jueces y Tribunales tenemos la grave encomienda de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico adecuado a ella. Éste es un mandato constitucional mutado en deber y compromiso personal desde que asumimos el ejercicio de la jurisdicción; mandato que lleva implícito otro negativo, de inaplicación sistemática de cualquier ley o disposición normativa de rango inferior que desborde o se aparte del cuerpo jurídico de inspiración constitucional.

El Poder judicial asegura, por tanto, la aplicación y efectividad de la legalidad vigente, y de ninguna otra; pero **que nadie acuda a los Juzgados y Tribunales en busca de soluciones al debate social abierto actualmente en Cataluña. Sólo a los responsables políticos corresponde encauzar ese debate y articular respuestas imaginativas que puedan resultar aceptadas por amplias mayorías sociales** y que, al tiempo, reporten beneficios mutuos a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, como desea y reclama el conjunto de la sociedad. Con ese propósito, debe recordarse que **la Ley no es inmutable, tampoco el texto constitucional**; y que la Ley debe estar al servicio de la sociedad y adaptarse las exigencias que en cada momento demanden sus ciudadanos mayoritaria y democráticamente, siempre dentro del marco de reforma admitido por la propia Ley. **Ninguna ley puede pretenderse democrática si ignora el Estado de derecho.**

Descendiendo a lo concreto.

En materia de justicia, el momento actual no es menos complejo, como corresponde a una Administración, históricamente olvidada, pero que busca ponerse al día tecnológica y organizativamente.

Nuestra organización judicial está inmersa en unas reformas sistémicas que se han emprendido y se están acometiendo en un entorno económico de precariedad y carencia de recursos, que dificulta seriamente su efectividad y el logro de una justicia de calidad.

La implantación generalizada del **nuevo modelo de oficina** judicial, concebida para una justicia del siglo XXI, está encontrando resistencias naturales relacionadas con una organización judicial anclada en el siglo XIX. Parece, pues, razonable la demanda de que este nuevo modelo de Oficina Judicial se acompasase con una nueva organización de Juzgados y Tribunales. Urge, por tanto, profundizar en el diseño de unos **Tribunales de instancia** que superen, de una vez por todas, los viejos partidos judiciales y la rígida asignación de asuntos por Juzgado, generalmente de competencia mixta, con el fin de hacer un uso más racional y eficiente de los recursos materiales y humanos, y que, al tiempo, asegure la especialización de Jueces y Magistrados por materias jurisdiccionales, como demanda una sociedad moderna y dinámica, cada vez más exigente en sus demandas de justicia.

La completa **digitalización de los procesos** y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación fijados como objetivos en la Ley 18/2011, de 5 de julio, y el cumplimiento de los objetivos de **papel cero** marcados en la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC, no podrán culminarse ni resultar plenamente efectivas si no es en un entorno de plena compatibilidad de los sistemas informáticos y programas de gestión documental, y en que se tengan en cuenta las singularidades de cada proceso –con alusión particular al proceso penal, en el que digitalización no siempre asegura la celeridad y las ventajas que se buscan-.

No nos cabe ninguna duda de que las nuevas tecnologías aplicadas a la tramitación de los expedientes judiciales, es la única opción de futuro para una gestión ágil y eficiente de los procesos; sin embargo, en el tránsito hacia su completa implementación será obligado contar con las aportaciones, la implicación y una capacitación suficiente de todos los operadores afectados, singularmente de los Jueces y Magistrados, pues éstos van a ser quienes den visibilidad a las ventajas de la digitalización, precisamente en el momento de la toma de decisiones, cuando requerirán de herramientas que permitan una consulta simultánea, intuitiva, ágil y sencilla de todos los archivos y diligencias que hayan de influir en ellas.

Estamos inmersos, en fin, en **importantes transformaciones procesales** que nos van a obligar a actuar con celeridad e importantes dosis de imaginación –porque ya se nos anticipa que los recursos económicos van a ser limitados- en campos como la reordenación de la **jurisdicción voluntaria**, de la implementación de unos servicios y equipos de **mediación intraprocesal**; en el campo **de la transparencia y accesibilidad** de los ciudadanos y profesionales a los criterios organizativos de los Juzgados y Tribunales, empeño en el que está comprometido el CGPJ y al que contribuiremos en los tiempos y con la dimensión que se nos demande; en el campo del reconocimiento y efectividad de los derechos **de las víctimas de los delitos**, reconocidos en su nuevo estatuto jurídico -articulado en Ley 4/2015-; en la **agilización de los procesos penales**, para adecuar los tiempos de la investigación a las limitaciones impuestas en la última reforma procesal -Ley 41/2015-, hasta tanto se defina y asiente un modelo de instrucción penal alineado con los sistemas acusatorios modernos.

Pero la transformación más relevante, desde la perspectiva del TSJC y de la reordenación territorial del Poder judicial, se hace visible desde el momento en que dicho Tribunal Superior ha asumido ya efectivamente las nuevas competencias que se le reconocen, por un lado, en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, con la regulación del recurso de casación en materia de Derecho Autonómico y que agotará la jurisdicción ordinaria en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC; y por otro, con la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de generalización de la doble instancia penal, que va a permitir la culminación de los procesos penales en la Sala Civil y Penal del TSJC.

Ambas reformas nos permiten avanzar en el proceso de descentralización de la labor jurisdiccional, realizando plenamente la previsión constitucional de que los Tribunales Superiores de Justicia culminan la jurisdicción en el ámbito autonómico. No obstante, su plena efectividad no se habrá producido hasta que no se dé una nueva dimensión a la casación penal ante el Tribunal Supremo, que habrá de quedar limitada a la mera función nomofiláctica, con abandono, por tanto, de su actual formato como tercera instancia real en los recursos de casación admitidos contra sentencias dictadas en apelación.

La asunción de estos nuevos cometidos e instancias van a exigir del Tribunal Superior una reordenación de sus Salas Civil y Penal, por un lado, y Contencioso Administrativo, por otro, un incremento obligado de su número de Magistrados, que adecue su carga de trabajo a la relevancia de la función que se les encomienda, y un esfuerzo y dedicación a la altura de responsabilidad transferida, la fijación de la doctrina jurídica en la interpretación de la norma en el ámbito territorial del Tribunal Superior, para lo que tendremos siempre como modelo a seguir el papel decisivo que el mismo Tribunal Superior está desempeñando en la aplicación y consolidación del Derecho civil de Cataluña.

No puc concloure aquesta exposició sense fer referència a alguns dels principals problemes que comprometen el normal funcionament dels òrgans judicials a Catalunya. L'elevat nombre de vacants judicials; la sobrecàrrega i congestió d'assumptes en molts d'aquets òrgans, singularment als de competència mixta; la precarietat de les plantilles de funcionaris, amb un elevat índex d'interinatge, en ocasions sense experiència ni formació adequada a la seva funció; etc,...

La superació d'aquestes mancances requerirà el millor de tots nosaltres, començant per aquesta Presidència que avui assumeixo, i seguint per la Sala de Govern del TSJC, els membres del qual comparteixen aquest compromís i així ho han demostrat en el passat; i també de la Generalitat, a través de la seva Conselleria de Justícia, com a responsable en la gestió dels mitjans personals i materials, sense l'efectiva implicació dels quals difícilment es podrà assolir la desitjada optimització de l'activitat jurisdiccional.

Aquesta millora de l'Administració de Justícia requerirà, a la fi, de la participació i l'esforç de tots els implicats, més enllà dels òrgans governatius i de gestió esmentats: dels Jutges i Magistrats; dels Fiscals; dels Lletrats de l'Administració de Justícia i de la resta de personal al seu servei; dels Metges forenses; de la Policia judicial; dels perits i personal tècnic col·laborador. Sense oblidar la important funció que exerceixen els Advocats i els Procuradors, creditors del màxim respecte i consideració.

Amb tots hi compto i tots trobareu al meu despatx una porta oberta permanentment a la col·laboració en tot allò que suposi una millora en el funcionament de l'Administració de justícia a Catalunya i, en definitiva, en un millor servei al ciutadà, al que ens devem tots i amb qui assumeixo avui aquest compromís públic.

Em permetran que, com a tancament d'aquesta exposició, reproduueixi un lema casteller -conegut és el meu arrelament al Penedès- i que serà la millor garantia d'èxit en la tasca que avui inicio: "Força, equilibri, valor i seny".

Moltes gràcies

Barcelona, a 26 de febrer de 2016